



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 40
SEPTIEMBRE
2025

Contenido

TEMA DEL MES: VOTO OBLIGATORIO, PAZ SOCIAL Y LA SOMBRA DE LA INTERVENCIÓN.....	3
CHILE BAJO LA LUPA: EL ESCENARIO POLÍTICO Y LAS EXPECTATIVAS CIUDADANAS AL INICIO DE LA CAMPAÑA	5
ALERTA CONCEPTUAL: RADIOGRAFÍA AL FORO DE SAO PAULO Y AL GRUPO DE PUEBLA Y SUS DESAFÍOS FRENTE A UN NUEVO CICLO ELECTORAL.....	7

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

VOTO OBLIGATORIO, PAZ SOCIAL Y LA SOMBRA DE LA INTERVENCIÓN

La contienda presidencial entra en una etapa más decisiva, dejando atrás los tiempos de simples posicionamientos y perfilamientos. Se trata de una fase en la que la opinión pública comienza a concentrarse más en los contenidos y propuestas de cada candidatura, ya formalmente desplegadas en el periodo de campaña que se iniciará el próximo 17 de septiembre, con actividades en la vía pública y entrega de información a los electores.

Este periodo resulta crucial, por cuanto los ocho candidatos que aspiran al sillón de O'Higgins estarán más expuestos al escrutinio público y deberán dar cuenta del verdadero alcance de sus proyectos en espacios de alta visibilidad y audiencia, como son los debates presidenciales. La experiencia muestra que estos encuentros pueden alterar las tendencias electorales según los aciertos o errores de los respectivos abanderados.

Por otro lado, a medida que se acerca la fecha de la primera vuelta, los actores políticos adquieren mayor conciencia de lo que realmente está en juego. En este contexto, el rol del Gobierno también se vuelve un factor a considerar. Aunque históricamente las administraciones han mantenido cierta prescindencia, la actual ha exhibido preocupantes signos de intervencionismo electoral desde distintos frentes.

En el ámbito legislativo, el rechazo y la abstención de parlamentarios oficialistas durante el trámite legislativo para la aplicación de una multa por no sufragar -condición necesaria para hacer efectivo el voto obligatorio consagrado en la Constitución- despiertan suspicacias sobre las motivaciones detrás de esta conducta. Estudios como el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo muestran que los candidatos de oposición obtienen un mejor desempeño entre los denominados "votantes obligados" (aquellos que no participaban bajo el régimen de voto voluntario). En contraste, la candidata oficialista Jeannette Jara reduce su rendimiento electoral en ese segmento, obteniendo mayor respaldo entre quienes ya participaban voluntariamente.

El hecho de que, a menos de 70 días de la elección presidencial, aún no exista plena claridad sobre la sanción por incumplir con el deber cívico de votar, deteriora la integridad electoral del proceso -un activo de nuestra tradición republicana- y puede interpretarse como un intento de influir en los resultados.

Se espera que el Senado enmiende con prontitud la controvertida tramitación de este proyecto que podría tener un significativo impacto en el derrotero de esta carrera presidencial. Al cierre de este informe, la Cámara Alta debate un acuerdo que reduciría en un 50% el tramo superior de la multa -desde 202 mil a 102 mil pesos- respecto de lo aplicado en los plebiscitos constitucionales. Este ajuste vuelve a abrir interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de la intención de relajar la sanción al comportamiento abstencionista.

A ello se suma el anuncio del Ejecutivo de acelerar la tramitación de proyectos de alto contenido valórico e ideológico -como la ley de aborto libre, el proyecto de eutanasia y la negociación colectiva ramal- para así ser discutidos en la antesala de la elección. Aunque en democracia esta estrategia es legítima, resulta evidente que el oficialismo carece de los votos necesarios para aprobar tales

iniciativas, lo que alimenta nuevamente las dudas respecto de si se está empleando la agenda legislativa con propósitos electorales o no.

También ha generado controversia la participación de miembros de empresas públicas en la contienda presidencial, quienes han emitido juicios contra candidatos opositores y, en algunos casos, se han integrado formalmente a comandos de campaña. Esta situación compromete la función y naturaleza de directores que deben velar por el interés exclusivo de la empresa y de la Nación, en tanto deben administrar un patrimonio que pertenece a todos los chilenos.

El tono de la campaña también se ha vuelto más duro, a partir de que la propia candidata oficialista Jeannette Jara ha instalado en diversos foros la idea de que su candidatura propiciaría mejores condiciones de “paz social”, motivando a los electores a evaluar esta dimensión como factor a considerar en el evento de que triunfara un candidato como José Antonio Kast, quien supuestamente no brindaría tales garantías de paz social. Esta retórica resulta dañina para la democracia, pues sugiere que ciertos sectores estarían impedidos de garantizar gobernabilidad y participar con libertad del ejercicio democrático.

En cuanto al debate presidencial realizado el miércoles 10 de septiembre, el encuentro dejó más dudas que certezas. Los primeros minutos, decisivos para captar la atención del público, se desperdiciaron en una polémica a todas luces artificial sobre el rol de los *bots* en la campaña electoral, donde los dos candidatos que lideran los sondeos abrieron un estridente fuego cruzado que dejó una mala primera impresión.

Como balance de la performance de las candidaturas más relevantes en los estudios de opinión, la abanderada comunista Jeannette Jara apareció como la gran derrotada: fue blanco de ataques constantes por parte de Marco Enríquez-Ominami, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, y no logró elaborar respuestas sólidas o convincentes a cada una de estas objeciones que la expusieron como la candidata de la continuidad. Kast, pese a su condición de favorito, evidenció un arranque no del todo sólido y tardó en recuperar el tono, aunque fue de menos a más. Al ser quien lidera los sondeos, arriesgó menos, por lo que tampoco logró sellar de manera definitiva su condición de favorito. Por su parte, Evelyn Matthei se mostró tranquila y sobria, logrando proyectar preparación y capacidad. Su estrategia fue no polemizar y proyectar un mensaje de esperanza centrado en que, durante su Gobierno, Chile podría superar los significativos problemas que enfrenta; no arriesgó demasiado considerando que es ella quien debe estrechar distancia con Kast y Jara.

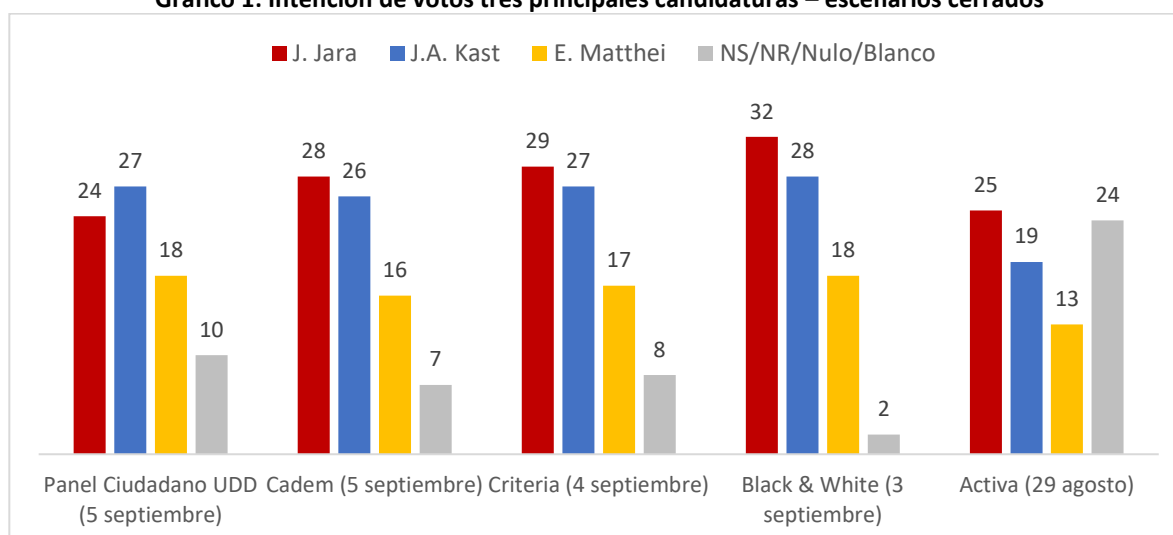
CHILE BAJO LA LUPA

EL ESCENARIO POLÍTICO Y LAS EXPECTATIVAS CIUDADANAS AL INICIO DE LA CAMPAÑA

Realizado el primer debate presidencial y a pocos días de que comience la difusión de propaganda electoral por medios de comunicación y a través de brigadistas en la vía pública, podemos decir que la campaña ya comienza a entrar en tierra derecha.

En este escenario, las distintas encuestas del país coinciden en la existencia de tres candidaturas principales que se ubican por encima de sus competidores. La ex ministra y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara; el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes se alternan los dos primeros lugares o presentan empates estadísticos en estas posiciones, y, por otro lado, la ex alcaldesa y abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien se ubica en un tercer lugar con una brecha de al menos 6 pp. (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Intención de votos tres principales candidaturas – escenarios cerrados



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Panel Ciudadano UDD, Cadem, Criteria, Black & White y Activa.

De todas maneras, es de esperar que existan variaciones en los porcentajes de intención de voto de aquí a noviembre. Lo anterior, a causa de los distintos hitos de campaña que vienen y que han mostrado mover la aguja en elecciones pasadas (debates, franja televisiva, publicidad en medios, despliegue en terreno, etc.). Además, se encuentra el hecho que el porcentaje de indecisos sigue siendo relevante en la mayoría de los estudios y, por tanto, hay un bolsón de votos a rescatar que pueden cambiar las tendencias.

A todo lo anterior se añade lo señalado por la encuesta Panel Ciudadano UDD, que ha demostrado, a través de su metodología de panel longitudinal, que en promedio un cuarto de los votantes cambia de preferencia semanalmente¹. En su última edición, del 5 de septiembre, se observa, por ejemplo,

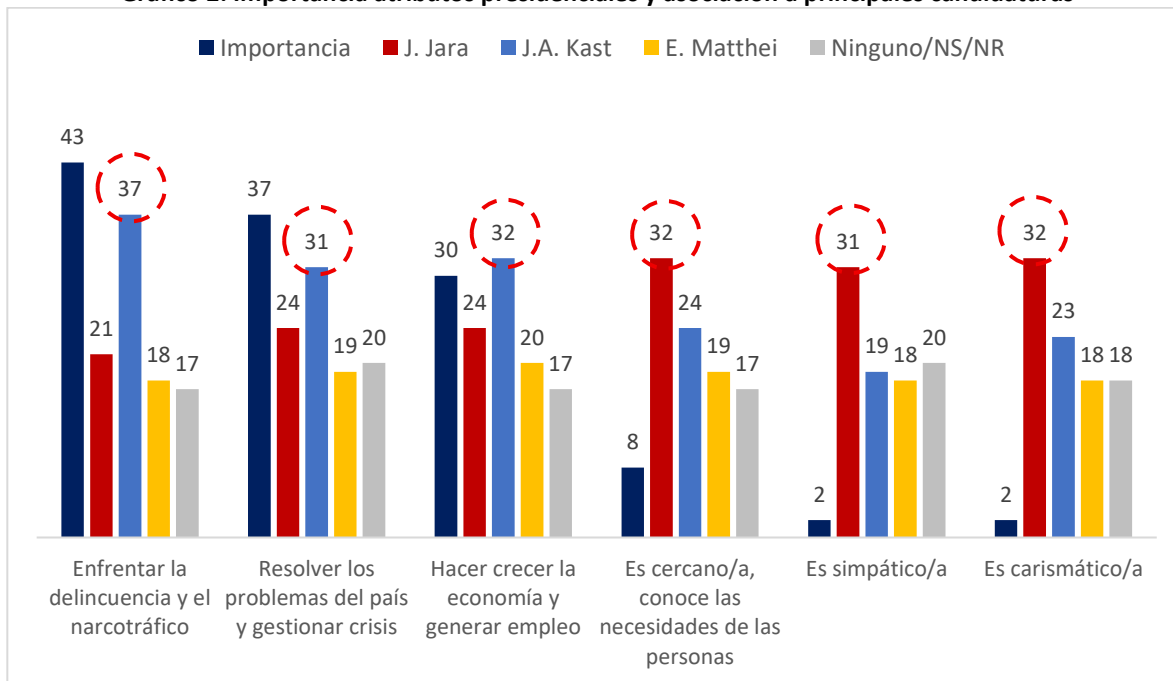
¹ <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/09/02/foto-enganosa-panel-ciudadano-revela-que-1-de-cada-4-votantes-cambia-de-candidato-semanalmente.shtml>

que Matthei pierde un 1% de sus votantes, sin embargo, obtiene un 2% adicional proveniente de ex votantes de Kast, suma un 1% de ex votantes de Jara y un 2% de antiguos indecisos.

En contraste, las variables que ya parecen estar prácticamente definidas, por su aparición reiterada en los estudios a lo largo del tiempo, son aquellos problemas que, a percepción de la ciudadanía, constituyen los principales desafíos del país. En este sentido, según la última encuesta Activa del 29 de agosto, este listado lo encabeza la delincuencia (46%), la inmigración (27%) y el desempleo (23%). Estas áreas son justamente aquellas que los chilenos consideran como las que más han empeorado durante el Gobierno de Gabriel Boric. La encuesta Cadem de la última semana de agosto indica que durante este mandato un 75% cree que el país está peor en delincuencia y crimen organizado, un 71% cree lo mismo en materias de inmigración y un 64% en empleo.

Esta situación genera expectativas particulares respecto a qué características son las buscadas en una candidatura presidencial. El mismo estudio mencionado da cuenta que la capacidad de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (43%), de resolver los problemas del país y gestionar crisis (37%), así como de hacer crecer la economía (30%), son los atributos más relevantes para ser Presidente a juicio de la ciudadanía. Cada uno de estos, según los encuestados, se asocian principalmente al candidato republicano, José Antonio Kast. Mientras que, por su parte, a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, se la asocia principalmente a atributos más “blandos”, como la cercanía, la simpatía y el carisma, los cuales están lejos de ser prioritarios para los chilenos en el contexto político actual.

Gráfico 2: Importancia atributos presidenciales y asociación a principales candidaturas



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Cadem (29 de agosto).

De todas formas, el ámbito presidencial no es el único espacio en dónde se traducen estas expectativas de cambio. La encuesta Critería del 28 de agosto da cuenta que, a nivel general, un 58% de los ciudadanos se inclinan por la necesidad de cambios radicales y, en cuanto a la composición del nuevo Congreso, un 74% prefiere que sus miembros sean expertos o académicos (en contraste a personas comunes y corrientes), un 58% que sean de derecha (en contraste a personas de izquierda), un 54% que sean de más edad (en contraste a personas jóvenes) y un 69% que sean independientes (en contraste a militantes de partidos políticos).

ALERTA CONCEPTUAL

RADIOGRAFÍA AL FORO DE SAO PAULO Y AL GRUPO DE PUEBLA Y SUS DESAFÍOS FRENTE A UN NUEVO CICLO ELECTORAL

En la retórica de la izquierda latinoamericana, tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla son presentados como espacios de articulación regional destinados a resistir el neoliberalismo y a ofrecer un horizonte alternativo de justicia social. El primero, fundado en 1990 con el impulso de Fidel Castro y Lula da Silva, buscó renovar el ideario socialista tras la crisis del bloque soviético. El segundo, creado en 2019, se proyecta como su heredero bajo un lenguaje más matizado, agrupando a personalidades políticas e intelectuales en torno a la bandera del “progresismo”. Para sus promotores, ambos espacios encarnan la voz de los pueblos frente a las élites conservadoras y al poder de los mercados globales, pretendiendo instalarse como alternativas legítimas al orden liberal actual.

El Foro de Sao Paulo nació en un contexto de debilidad de la izquierda y de predominio de proyectos de centro y derecha. Su objetivo central fue recuperar el poder político en la región a través de elecciones y nuevas alianzas sociales. Inspirado en la teología de la liberación y en la teoría populista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe², amplió el sujeto revolucionario incorporando campesinos, pueblos indígenas, feministas, ambientalistas y diversidades sexuales. La década de los noventa, marcada por la crisis de deuda, ajustes estructurales y estallidos sociales, ofreció el terreno fértil para que el Foro capitalizara el descontento y llevara a la izquierda nuevamente al poder.

El “Socialismo del Siglo XXI”, encarnado por gobiernos como el de Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador, se caracterizó por una serie de prácticas comunes. La eliminación de los límites al mandato presidencial captura de poderes del Estado por parte del Ejecutivo, politización de las fuerzas armadas y persecución de adversarios políticos, lo que en el largo plazo debilitó los contrapesos institucionales.

Sin embargo, hacia fines de la segunda década del siglo XXI, el modelo entró en crisis debido a las derrotas electorales en Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, junto con la pérdida de legitimidad internacional, evidenciada por el éxodo venezolano, la que minó el atractivo del Foro.

En ese vacío emergió el Grupo de Puebla. A diferencia del Foro, no es una alianza de partidos, sino de personalidades políticas e intelectuales como expresidentes, líderes de izquierda y activistas, que buscan proyectar un discurso progresista de largo plazo. Entre sus propuestas destacan reforzar el rol del Estado, promover la justicia fiscal, revisar privatizaciones, impulsar la renta básica solidaria, avanzar hacia la integración regional y adoptar una agenda cultural centrada en derechos de género, migración y transición ecológica. El cambio de lenguaje es significativo, ya no se habla de socialismo, sino de progresismo, término con fuerte carga emocional positiva que permite tachar a sus opositores de “retrógrados” o “reaccionarios”.

Desde una perspectiva liberal, tanto el Foro de Sao Paulo, como el Grupo de Puebla deben analizarse como proyectos de poder hegemónico, más que como espacios de reflexión. El cambio terminológico de socialismo a progresismo no altera la sustancia, ambos buscan construir mayorías que permitan debilitar la institucionalidad liberal y ampliar la dependencia política mediante

² Gómez (2021). Ernesto Laclau y Chantal Mouffe: Populismo y hegemonía. Editorial Gedisa.

medidas estatales clientelares. La ampliación de derechos colectivos y el reconocimiento identitario tienden a subordinar las libertades individuales universales, abriendo la puerta a regímenes que restringen la igualdad ante la ley y erosionan los contrapesos democráticos.

El progresismo que impulsa el Grupo de Puebla es, en esencia, la continuación del Socialismo del Siglo XXI bajo un ropaje más atractivo. Mantiene la lógica populista de creación constante de “pueblos” como sujetos revolucionarios, mientras conserva prácticas autoritarias, como lo demuestra su respaldo a gobiernos como el de Venezuela.

Para una visión liberal, el verdadero progreso no radica en rearticular proyectos hegemónicos bajo nuevas etiquetas, sino en fortalecer el Estado de derecho, la libertad individual y la igualdad ante la ley. El desafío está en advertir que el progresismo del Grupo de Puebla no es una ruptura con el pasado, sino una actualización discursiva de un proyecto que ya mostró sus límites, dependencia estatal, debilitamiento institucional y erosión de la democracia. Como bien señala Kristian Niemitz, se trata de “una idea fallida que se rehúsa a morir”.

El tránsito de Sao Paulo a Puebla muestra la capacidad de la izquierda latinoamericana para reinventarse simbólicamente cuando sus proyectos entran en crisis. No obstante, bajo el lenguaje de justicia social y progresismo persiste la misma matriz socialista que, en la práctica, amenaza las libertades individuales y socava la institucionalidad democrática. Para el liberalismo, la advertencia es clara, tras la retórica progresista se esconde un proyecto de poder que tensiona la democracia y restringe la libertad.

Desde el 2023, países como Argentina, Ecuador y Paraguay se han alejado de la influencia del Grupo de Puebla y probablemente Chile y Bolivia tomen la misma dirección. Ante una nueva reconfiguración del panorama político en América Latina, cabe preguntarse cuáles serán los nuevos lineamientos de este grupo y sus promotores, y como volverán a rearticular sus fuerzas políticas ante un nuevo ciclo electoral en la región.